



La oposición como protesta permanente: un ideal extraviado

Raúl Opazo Fuentes
Investigador Asociado, Faro UDD.

En los albores de nuestra joven república, uno de los principales desafíos para otorgar estabilidad al país fue definir no solo la forma de gobierno que debía adoptar Chile, sino también el carácter y los límites de su oposición. Diego Portales resumió en 1832 el problema al abogar por “un sistema de oposición que no sea tumultuario, indecente, anárquico, injurioso, degradante al país y al Gobierno. (...) queremos aproximarnos a la Inglaterra en cuanto sea posible en el modo de hacer oposición”.

Si bien una oposición libre de esas características negativas logró predominar en el Chile post-transición, el estallido social quebró drásticamente dicho equilibrio. La izquierda radicalizó su enfrentamiento al gobierno por dentro y fuera del sistema político institucional: con más o menos adjetivos, el reproche portaliano volvió a cobrar relevancia. Sin embargo, este no fue el caso durante el gobierno de Boric y, a pesar del intento oficialista reiterado de instalar la idea de una supuesta “oposición obstruccionista”, los datos de productividad legislativa desmienten categóricamente un comportamiento semejante.

El obstruccionismo tampoco se vio en las calles y la intensidad de las movilizaciones durante los últimos gobiernos fue asimétrica. Según cifras del Observatorio de Conflictos del COES, en los tres primeros años del gobierno de Sebastián Piñera hubo seis veces más protestas multitudinarias que en el periodo equivalente de Boric. Disminución curiosa, considerando que, si la protesta responde a “causas estructurales”, no ha habido ninguna transformación que justifique tal contraste. Pero, incluso si uno evita presumir una mera

instrumentalización partidaria de las organizaciones de la sociedad civil, el apoyo y participación de las autoridades salientes en protestas operó como una fuente importante de legitimación.

No obstante, concebir la oposición como movilización permanente es una forma defectuosa de procesar la información política y es perjudicial para la sociedad, el gobierno e incluso los mismos opositores. La protesta continua degrada la esfera pública y sesga a los manifestantes, porque induce a confundir una multitud con una mayoría social. Además, esta movilización incesante requiere que la fábrica de escándalos funcione a tiempo completo; y, si la demanda de indignación supera a la oferta, las razones para marchar simplemente se inventan. La disfuncionalidad de esta forma de hacer política se hizo patente en el fracaso de la primera Convención Constitucional, pero no es claro que toda la futura oposición haya aprendido la lección.

Lamentablemente, los llamados y preparativos de algunos grupos (incluyendo al PC) para enfrentar a un gobierno que aún no entra en funciones son un mal indicio. Esa actitud recuerda al extraño fenómeno de ciertas tomas o paros universitarios sin causa que se hacían con el expreso propósito de definir un petitorio. La manifestación pacífica es un derecho fundamental de cualquier democracia, pero convertirla en excusa para la agitación constante va en detrimento de una deliberación de calidad y de un sistema político saludable. Esperemos que, tras los vaivenes de más de doscientos años de vida republicana, Chile cuente nuevamente con una oposición democrática y responsable.